
Infierno en el oasis chileno

JOHN MÜLLER

Periodista chileno. Fue director adjunto del diario *El Mundo*. Ahora trabaja en la divulgación económica, la reflexión y el columnismo desde medios como *ABC*.



Avance

Los desórdenes en el Metro de Santiago de Chile, por una subida de tarifas, provocaron en octubre de 2019 un «estallido social» cuyo nivel de violencia sorprendió a todo el mundo. ¿Qué había detrás? Los sociólogos señalaron que, a pesar de que descendían las cifras de pobreza y desigualdad y el desequilibrio de rentas, la «desigualdad de trato» entre clases sociales seguía siendo manifiesta-

mente irritante para muchos chilenos. Como suele suceder en las crisis, otros factores confluyeron en esta, como una serie de errores en forma de declaraciones, primero, y decisiones, después, del Gobierno bajo la presidencia de Sebastián Piñera (derecha moderada), unidos a la desmoralización y desorden de los Carabineros tras diversos escándalos, ante lo que el Gobierno cometió el grave error de promulgar el estado de emergencia constitucional para sacar al Ejército a las calles. Se unió a lo anterior el oportunismo político del líder del Partido Comunista, pidiendo la renuncia del presidente de la República, y del general encargado del restablecimiento del orden, deslegitimando el discurso de Piñera. Resultado: la tolerancia de la población hacia la violencia aumentó extraordinariamente y las instituciones del Estado tocaron fondo en términos de legitimidad social. El estado de anomia (ausencia de ley), continuó durante varias semanas más y una parte importante de los políticos se cruzó de brazos y decidió esperar cínicamente a que el presidente cayera.

Ante una marcha espontánea y pacífica que congregó a 1,2 millones de personas en la capital y hasta tres millones en todo el país, el Gobierno respondió con una nueva agenda social que congeló los precios de algunos servicios, introdujo aumentos salariales y mejoró las pensiones; y a continuación, Piñera reformó el Gobierno y puso a un moderado al frente de la cartera de Interior. A pesar de todo, continuaron las revueltas, por lo que se inició un proceso, bendecido por Piñera, para sustituir la llamada «Constitución de Pinochet», el texto que regía desde 1981 y que había sido sometido a más de un centenar de reformas.

Dicho proceso implicó varias consultas a la ciudadanía que, en septiembre de 2022, rechazó el primer texto por un porcentaje de 61,8. El Gobierno de Gabriel Boric decidió continuar el proceso y el segundo texto se sometió a referéndum en diciembre de 2023, pero los ciudadanos lo rechazaron con el 55% de los votos, y el proyecto de una nueva ley fundamental distinta a la de Pinochet ha quedado aparcado de forma indefinida.

¿Qué ha cambiado desde aquel «estallido social»? El porcentaje de chilenos que cree que fue negativo para el país ha pasado del 33% en julio de 2020 a un 55% en octubre de 2023. Esta evaluación crecientemente negativa es compartida por el 81% de quienes se sienten identificados con la derecha y centroderecha, el 53% que se identifica con el centro y solo el 18% de los de izquierda y centroizquierda. El porcentaje de apoyo a las movilizaciones sociales como medio para conseguir cambios cayó del 76% en 2020 al 44% en 2023. La afirmación «la violencia en las manifestaciones es la única manera de ser escuchados por la clase política», que llegó a ser aceptable para cuatro de cada diez chilenos en 2020, bajó a dos de cada diez en 2022 y ha vuelto a subir a casi tres de diez en 2023. Las encuestas detectan que, desde 2013, los chilenos creen que su país está estancado o en decadencia. Y algo más. Algo sobre lo que las encuestas no preguntan directamente, pero que asoma a partir de otras cuestiones: la difícil gobernabilidad de Chile. Esa dificultad se vio acentuada tras el cambio del sistema electoral de 2015, que apostó por uno de mayor proporcionalidad en detrimento del que tendía al bipartidismo. El resultado fue un parlamento

fragmentado y cada vez menos manejable; y sin una mayoría disciplinada en el Congreso, el poder Ejecutivo quedaba inerte, incapaz de gobernar. La élite política pretende dar con una salida aprovechando la discusión constitucional, pero el último texto sometido a referéndum no parecía que diseñara un sistema de gobernanza realmente eficaz y, como se ha señalado, fue rechazado por los chilenos.

En conclusión, en 2024, muchos de los indicadores socioeconómicos que fueron usados en 2019 para argumentar que la desigualdad era el principal motivo del estallido son peores que entonces. La pobreza ha aumentado, el crecimiento no acaba de despuntar, el ahorro privado se ha reducido, la educación se ha deteriorado, la deuda pública ha aumentado, el sistema de pensiones no ha sido reformado. Es verdad que la pandemia contribuye a distorsionar aún más todos estos indicadores. Pero lo más relevante es que las dos causas que podrían explicar el malestar chileno, que son la falta de prosperidad económica y de un Gobierno eficaz, siguen sin respuesta. **NR**

Foto: Protestas callejeras en Santiago de Chile. © Shutterstock / Rodrigo Merino Rojo

*Leer aquí el
artículo completo*

